

El Salario Social en 1989. Voces revisitadas



Xoán Lombardero Posada
Área de Trabajo Social y Servicios
Sociales.
Universidade de Vigo
xlombardero@uvigo.es

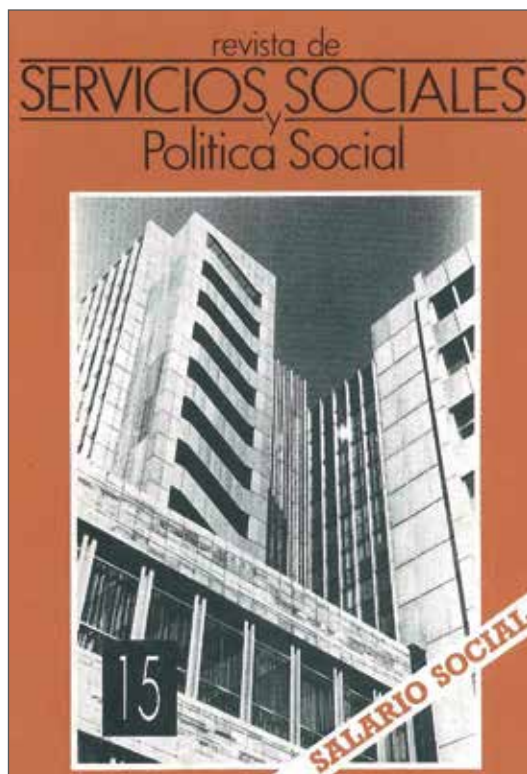
En el tercer trimestre de 1989 no se oía hablar de fin de la Historia, no se sabía si el siglo iba a ser largo o corto (ni siquiera parecía estar claro si terminaba en el año 2000 o en el lejano 2001). Muro de Berlín no conjugaba con caer. La tasa de desempleo en España era del 16,57 %, la mayor de la entonces Comunidad Europea. En el continente se comenzaba a hablar de una “forma capitalista de llegar al socialismo” que era la propuesta de Renta Básica. Con todo, lo que se estaba implantando realmente eran los denominados “salarios sociales” o “rentas mínimas”. Como es sabido, habían comenzado en Bélgica y Luxemburgo, llegaron a Francia en 1988 y al País Vasco en los primeros meses de 1989; los sindicatos españoles lo habían reclamado en diciembre de 1988. Haciéndose eco de estas voces, que eran las de la profesión, “Servicios Sociales y Política Social” dedicó su número 15 al Salario Social.

Aparece, por un lado, la postura del Consejo General, editorializada en las primeras páginas del número y desarrollada en pormenor en un artículo de Ana Díaz y Gustavo García. La idea clave es la aceptación de los subsidios de garantía, siempre con carácter transitorio y dentro de unos parámetros delimitados:

- a) Contra el monetarismo: desvincular la idea de bienestar del indicador exclusivo de renta y, por consiguiente, de la acción única de este salario. Para la posición colegial, resulta incompleta cualquier política de protección destinada a compensar la ausencia de ingresos sin ofrecer a las personas otras posibilidades

de participación social y el desarrollo de las capacidades creativas.

- b) Extensión de los derechos ya reconocidos: las insuficiencias de ingresos monetarios deben solventarse mediante el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución universalización de las pensiones y extensión subsidios por desempleo. Hay que considerar beneficiaria a toda la ciudadanía “y no solo al «cotizante» en el marco del mercado liberal” (p. 29). Para esto se debe retirar el carácter contributivo de ambas modalidades y asegurar una dotación presupuestaria suficiente.
- c) Por una política social que no genere espacios de marginación: los Servicios Sociales no



Social income in 1989. Revised voices

deben formar parte de la gestión económico-administrativa ni de la inspección de condiciones para este ingreso, “solo una visión basada en el paternalismo puede contemplar que la gestión de los ingresos mínimos se ubique en los Servicios Sociales”. Para Ana Díaz y Gustavo García esta posibilidad crearía un espacio diferenciado, tendente a la marginalidad, de los sistemas “normalizados” de pensiones y subsidios. En frente, “el desarrollo de los Servicios Sociales puede constituir un elemento de primer orden para equilibrar los riesgos de desmotivación y apatía que una política de subsidios puede conllevar”(p. 32-33). Otra razón tiene que ver con el personal ya contratado y adscrito en Servicios Sociales. Si los ingresos mínimos se ponen en marcha, en todo caso, habrá que hacerlo con nuevas contrataciones y nunca a costa de detraer o desplazar los recursos humanos del Sistema de Servicios Sociales que ya está en marcha para sustituirlo o suplantarlo por este modelo:

“defendemos que la implantación de estos subsidios ha de contemplar un desarrollo simultáneo y acorde de los Servicios Sociales, en cuanto oferta específica de atenciones para la convivencia personal y la integración social, como forma de disminuir los riesgos de una sociedad subsidiaria”(p. 33).

Un último argumento hace referencia a la intervención profesional; se considera que este sistema introduce un elemento distorsionador de las funciones y de los mecanismos propios de los Servicios Sociales y del Trabajo Social, los cuales se sitúan:

“en torno al refuerzo de las capacidades de autovalimiento y convivencia de los individuos

y los grupos, a partir de una voluntad expresa y libre de cada uno de ellos, indispensable para lograr su necesaria participación”(p. 33).

El Colegio oficial de Guipúzcoa, a su vez, realizaba una descripción y primeras valoraciones sobre el Plan Integral de Lucha contra la pobreza, aprobado por el Gobierno vasco en marzo de ese mismo año. El Plan constaba de tres niveles: un primero asociado a la noción de renta mínima o Ingreso Mínimo Familiar, “una intervención social de tipo económico-asistencial, que evidentemente es obligada dada las notables carencias de recursos económicos en el colectivo poblacional atendido”(p. 60), valoración en la que ya vemos otra perspectiva a respecto de la del Consejo. Un segundo nivel era el formado por las Ayudas de Emergencia Social, y un tercero referido a la aplicación de medidas sectoriales de lucha contra la pobreza, que en ese momento no se había implementado. Coinciden con el Consejo General en considerar la ayuda económica insuficiente por sí misma, aunque no aparecen las cautelas de éste a la gestión por parte de los trabajadores sociales y los Servicios Sociales. Se reclaman recursos humanos para la implantación del programa (p. 63) asumiendo funcionalmente su cometido. En su experiencia de meses con una renta mínima, el Colegio de Guipúzcoa hace mención a diversas cuestiones: el tratamiento de la economía sumergida, esto es, su contabilización o no por parte de las trabajadoras sociales y las situaciones de discrecionalidad profesional, agravio para las personas usuarias, que puede comportar entre quienes declaran o no estos ingresos (p. 60); la crítica al concepto de unidad familiar establecido, considerado como restrictivo al no contemplar a familias acogidas provisional o temporalmente por familiares cercanos. Por otro lado, y aun teniendo en cuenta la vocación universal de los Servicios

Sociales, para el Colegio de Guipúzcoa estos no llegan a amplios colectivos. Hay una constatación de que tienen acceso a ellos personas con menos necesidades que otras. Es en esta línea en la que el Colegio entiende que el Ingreso Mínimo debería ser una prestación reglamentaria de derecho, estableciendo qué colectivos deben entrar (en su propuesta, madres solteras en el hogar de los padres, mujeres separadas con hijos sin recursos, parados de larga duración, personas solas, miembros de la tercera edad con pensiones bajas, familias extensas, parados jóvenes...). Dado que el Plan existe, debe aprovecharse para realizar una adecuada recogida de la demanda y elaborar unos indicadores de evaluación (p. 65).

Intervención profesional, contraprestaciones, tiempos

El denominado Ingreso Mínimo contemplaba una serie de obligaciones para las personas beneficiarias, las denominadas “contraprestaciones” que después se extenderían por el resto del Estado con la generalización desigual de las rentas mínimas de inserción. Pero su inclusión en el plan vasco de 1989 creaba ya un desafío profesional concreto. ¿Qué opinar, qué hacer? Para el Colegio de Guipúzcoa, las contraprestaciones debían suprimirse ya que se “dan en el proceso mismo de nuestra intervención profesional”, su carácter obligatorio no está en línea con la actuación del Trabajo Social ya que “se trata de recuperar a las personas en su globalidad, de hacerles partícipes y sujetos activos de su historia personal” (p. 65). En este punto la posición de Ana Díaz y Gustavo García, que se movían en un marco más genérico, se expresa por este motivo de forma también más conceptual. No están en desacuerdo en vincular los ingresos mínimos a actividades productivas, pero éstas no se refieren específicamente a lo que

perfila en el Plan Vasco, sino a una comprensión de la productividad con un carácter no mercantil, en la que incluyen la “oferta cultural, deportiva y de solidaridad humana” (p. 32).

Encontramos otras voces sobre esta cuestión en las profesionales con tareas en los ayuntamientos, que también tienen voz y espacio en la revista. Así, Miren Amilibia, en una narración detallada, crítica -y hermosa- sobre el Plan Vasco desde los Servicios Sociales de Zumarraga entiende que las contraprestaciones no significan una novedad para el Trabajo Social; al contrario, serían un instrumento conocido y utilizado por la profesión, “tiene que ver con nuestro papel como profesionales que intervienen en el proceso de socialización del individuo y sobre la aceptación y respeto que damos a los usuarios al hacerles partícipes activos de su historia personal” (p. 83).

La idea de que un ingreso mínimo, lejos de crear dependencia para la persona usuaria e inconvenientes profesionales para los trabajadores sociales, puede ser una oportunidad para el Trabajo Social es defendida por Maite Esnaola y por Lucía Corral, en diferentes artículos. Para ésta “el salario social favorece la intervención de los trabajadores sociales ya que se verían liberados de tareas poco claras de su responsabilidad profesional, donde se ocupa tiempo y esfuerzo” (p. 75). Para Maite Esnaola, “sin lugar a dudas, la garantía de derecho a un mínimo de renta supondría un punto de avance social importante y permitiría al Trabajo Social un desarrollo en línea con las concepciones más avanzadas de los Servicios Sociales” (p. 79).

¿Cuánto tiempo debería durar una prestación de estas características? Realizar la cuestión delimita ya, como es obvio, la postura. Rosa Domènech considera que el ingreso debe tener un carácter

Social income in 1989. Revised voices

temporal y debe estar especialmente dirigido no tanto para “usuarios habituales” (p. 69) de servicios sociales sino para aquellas personas que, integradas socialmente, dejan repentinamente de tener ingresos por cualquier circunstancia. A la temporalidad también aluden Ana Díaz y Gustavo García, los ingresos mínimos deben tener un carácter marcadamente transitorio, permitiendo cubrir con urgencia carencias de ingresos que atentan contra el concepto mismo de nivel de vida digno.

El número 15 de la revista se cierra con dos artículos sobre experiencias dadas en España. Carmen Guerra realiza un exhaustivo relato sobre la garantía de ingresos mínimos a las familias afectadas por el síndrome tóxico iniciado en 1982, el cual no requería contraprestaciones, y Montserrat Ponti, Isabel Jundo, Maribel Lineros y María del Prado Romero tratan, situándose en los ayuntamientos de la Sierra Sur de Sevilla, sobre el subsidio de desempleo agrario de Andalucía.

Puedes acceder al número 18: Salario social a través de nuestra WEB:

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/revista_digital/publicas/no_15_salario_social/